

número 1.428/1986, promovido por «Hogar y Clínica de San Rafael», de Vigo, sobre reducción del precio de los servicios sanitarios concertados con la Seguridad Social, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Manuel Andrés Fariña Gómez, y por fallecimiento de éste, por el Procurador don Ignacio Pardo de Vega, en nombre y representación del "Hogar y Clínica de San Rafael", de Vigo, contra la Resolución del Instituto Nacional de la Salud de fecha 1 de septiembre de 1986, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra otra de la Dirección Provincial de Pontevedra en Vigo del INSALUD de fecha 20 de febrero de 1986, por la que se reducían las tarifas aprobadas como retribución a los servicios prestados en régimen de concierto con la Seguridad Social, declaramos nulas dichas Resoluciones por ser contrarias a derecho, y declaramos vigentes las tarifas del concierto suscrito el 31 de octubre de 1984 por el "Hogar y Clínica de San Rafael" con el INSALUD, sin ser minoradas en el 5 por 100 del extinguido Impuesto General de Tráfico de Empresas; sin hacer imposición en costas.»

Asimismo, se certifica que contra la referida sentencia se interpuso por el Instituto Nacional de la Salud recurso de apelación, que el Tribunal Supremo declaró desistido por auto de 27 de febrero de 1991.

Lo que comunico a VV. II.  
Madrid, 17 de julio de 1991.-P. D., el Director general de Servicios,  
Luis Felipe Paradelá González.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y Director general del Instituto Nacional de la Salud.

**22624** *ORDEN de 29 de julio de 1991 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el recurso contencioso-administrativo número 79/1990, interpuesto contra este Departamento por don Jorge Luis Ríos Álvarez.*

De Orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha 22 de mayo de 1991 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), en el recurso contencioso-administrativo número 79/1990, promovido por don Jorge Luis Ríos Álvarez, sobre sanción disciplinaria, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Desestimamos el recurso interpuesto por ser ajustado a derecho el acto impugnado: sin costas.»

Lo que comunico a V. I.  
Madrid, 29 de julio de 1991.-P. D., el Director general de Servicios,  
Luis Felipe Paradelá González.

Ilma. Sra. Subsecretaria.

**22625** *ORDEN de 29 de julio de 1991 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 99/1988, interpuesto contra este Departamento por don Enrique Suárez Muñiz.*

De Orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha de 28 de febrero de 1991 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 7.ª), en el recurso contencioso-administrativo número 99/1988, promovido por don Enrique Suárez Muñiz, sobre sanción disciplinaria, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el Letrado don Alfonso Codón Herrera y seguido por la Procuradora doña Lydia Leiva Caveró, en nombre y representación de don Enrique Suárez Muñiz, contra la Resolución de 29 de mayo de 1986 de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo que impuso al recurrente la sanción de cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo por una falta grave, y contra la desestimación del recurso de alzada por Resolución presunta del Ministerio de Sanidad y Consumo, debemos declarar y declaramos ajustadas a Derecho dichas Resoluciones; sin imposición de costas.»

Lo que comunico a V. I.  
Madrid, 29 de julio de 1991.-P. D., el Director general de Servicios,  
Luis Felipe Paradelá González.

Ilma. Sra. Subsecretaria.

**22626** *ORDEN de 29 de julio de 1991 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 1.827/1989, interpuesto contra este Departamento por «Salgado y Compañía, Sociedad Anónima».*

De Orden del excelentísimo señor Ministro, se publica, para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha 13 de marzo de 1991 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 8.ª), en el recurso contencioso-administrativo número 1.827/1989, promovido por «Salgado y Compañía, Sociedad Anónima», sobre sanción de multa impuesta en defensa del consumidor, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo número 1.827/1989, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de «Salgado y Compañía, Sociedad Anónima», contra Resoluciones de 28 de noviembre de 1983, de la Jefatura Provincial de Comercio Interior de Madrid, y de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad y Consumo, de fecha 23 de octubre de 1989, por la que se impone a la Entidad actora la sanción de 25.000 pesetas, como consecuencia de actuaciones seguidas en expediente sancionador número 28-131-830, declarando como declara la Sección la plena conformidad al ordenamiento jurídico de las Resoluciones impugnadas y sosteniendo, en consecuencia, su plena validez y eficacia, y no apreciándose especial temeridad ni mala fe, y en aplicación del artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa no procede hacer expresa imposición de costas.»

Lo que comunico a VV. II.  
Madrid, 29 de julio de 1991.-P. D., el Director general de Servicios,  
Luis Felipe Paradelá González.

Ilmos. Sres. Secretario general para el Consumo y la Salud Pública y Presidente del Instituto Nacional del Consumo.

**22627** *ORDEN de 29 de julio de 1991 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 557/1988, interpuesto contra este Departamento por don Silvestre Prieto Fernández.*

De Orden del excelentísimo señor Ministro, se publica, para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha de 27 de febrero de 1991 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 7.ª) en el recurso contencioso-administrativo número 557/1988, promovido por don Silvestre Prieto Fernández, sobre sanción disciplinaria, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales, señor Requejo Calvo, en nombre y representación de don Silvestre Prieto Fernández, contra la Resolución de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo de 30 de diciembre de 1986 por la falta que se imponía al recurrente, la sanción de suspensión de empleo y sueldo durante cinco días como autor de una falta disciplinaria grave de faltas de respeto con el público prevista por el artículo 124.4 del Estatuto de Personal Sanitario Titulado y Auxiliar de Clínica de la Seguridad Social de 26 de abril de 1978, debemos declarar y declaramos ajustada a Derecho dicha Resolución. No se hace expresa condena en costas.»

Lo que comunico a V. I.  
Madrid, 29 de julio de 1991.-P. D., el Director general de Servicios,  
Luis Felipe Paradelá González.

Ilma. Sra. Subsecretaria.

**22628** *ORDEN de 29 de julio de 1991 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), en el recurso contencioso-administrativo número 407/1988, interpuesto contra este Departamento por doña María Josefa Álvarez González, doña Balbina Celada Cabero, doña María Mercedes de la Calle Murguía, doña Esperanza Francisca Álvarez Moreno y doña María Teresa Belén Casares Hernández.*

De Orden del excelentísimo señor Ministro se publica para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha de 15 de abril de 1991 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), en el recurso